En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los días del mes de marzo del año dos mil trece, reunida en Acuerdo la **Sala B** de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Graciela Mercedes García Blanco y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: **"Q., F. N. c/ V., J. O. y otros s/ DEMANDA LABORAL (haberes e indemnizaciones de ley)", expte. nro. 494/12**, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral nro. 1 (expte. nro. 1942/02), y atento al resultado del sorteo establecido en el art. 271 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 905), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, Dra. Nélida Susana Melero y Dra. Graciela Mercedes García Blanco.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: **PRIMERA**: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 842/864? y **SEGUNDA**: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

La Sra. Juez de la instancia de grado rechazó la excepción de prescripción planteada por las codemandadas Pesquera del Golfo S.A. y Juan Osvaldo Videla, conforme lo resuelto en el Considerando I.

Admitió la demanda, conforme lo dispuesto en los Considerandos II, III y IV y, en consecuencia, condenando al Sr. J. C. V., P. d. G. SA y C. de A. D. P. SA (C.) a abonar a la Sra. F. N. Q., la suma que

emerja de la liquidación que practicará el perito contador actuante en autos en la etapa de ejecución de sentencia, en el plazo de DIEZ (10) días de quedar firme la misma, suma que se incrementará conforme lo dispuesto en el Considerando IV, debiendo tenerse presente lo dispuesto por el art. 277 LCT.

Condenó al Sr. J. O. V. a entregar, en el plazo de DIEZ (10) días de quedar firme la presente, el certificado de trabajo solicitado por la actora de acuerdo a los alcances que en definitiva se resuelven en el presente juicio, en un todo de acuerdo con lo establecido por el art. 80 de la LCT y conforme a lo determinado en el Considerando IV.

Rechazó la plus petitio solicitada por la codemandada P. d. G. SA de acuerdo a lo decidido en el Considerando V.

Impuso las costas a las codemandadas vencidas y reguló los honorarios. Tal decisión es apelada por C..

Impugnó el fallo que hizo lugar a la responsabilidad solidaria peticionada por la actora, causándole agravio por apartarse el mismo de las previsiones en materia de solidaridad, ya que la prueba rendida en autos confirma que tomó en locación una planta procesadora de pescado cerrada desde hacía casi un año, en la que no laboraba ningún operario.

Indica que paradójicamente la valoración que efectúa la a-quo en la sentencia concluye en lo mismo, pudiéndose leer en varios pasajes la cita de testigos, exoperarios de V., que si bien declaran haber conocido a directivos de P. d. G. S.A., jamás entendieron trabajar para C. y dejaron aclarado que solo tomaron conocimiento de la vinculación, mucho tiempo después de que hubieran cesado sus respectivos contratos.

Señala que la sentencia dio por sentado que su mandante arrendó una planta cerrada y sin funcionamiento ni empleados trabajando, dice que su mandante comenzó de origen la explotación de un establecimiento industrial en el que otrora funcionaba otra empresa y que de acuerdo lo expone la sentencia se habían extinguido los contratos de trabajo, y si ello es así no entiende por qué debe responder solidariamente.

Señala que la sentencia entendió que no hubo cesión de contratos de trabajo y los contratos entre V./. d. G. S.A. y el actor ya se encontraba extinto, entonces por qué razón se extiende su responsabilidad. No dando respuesta lógica al interrogante, máxime cuando la extinción del contrato entre el actor y el tándem V./P. d. g. S.A. se había configurado mucho tiempo antes.

Expresa que en la sentencia se indicó que en el caso se configura entre las codemandadas una transferencia de establecimiento comercial por lo que la situación prevista en los arts. 225, 227 y 228 LCT. Lo que no es cierto.

Considera que el supuesto no ha quedado configurado porque no ha existido continuidad en la explotación; pues una cosa es la cesión, por cualquier título, de un establecimiento en marcha, que el de uno que cesó en su actividad, extinguió su titular los contratos de trabajo y dejó de funcionar, y en tal situación que es la de autos no puede hablarse de establecimiento, sino de un inmueble vacuo.

Aduce que tampoco puede hablarse de la existencia de contratos de trabajo, pues estos se extinguieron sin que ninguna norma legal contemple una serie de

obligación *propter rem*.

Indica que se realiza una exégesis absolutamente desproporcionada y desviada del sentido de justicia, ignorándose los principios del derecho laboral.

Transcribe doctrina sobre la seguridad jurídica y entiende que la interpretación que realiza la juzgadora resulta exorbitante y enuncia en qué supuestos alcanza la solidaridad prevista en los arts. 225, 227 y 228 de la LCT, insiste que su "confiriente" resultó ser la arrendataria de un inmueble que en algún momento fue su establecimiento, no pudiéndose tener por establecimiento en los términos del art. 6 de la LCT a un edificio cerrado y ruinoso, que no produce ni tiene operarios trabajando.

Con cita de doctrina da las pautas para que opere la solidaridad, agrega que no se trata aquí de aplicar un criterio restrictivo o amplio de interpretación del alcance de las obligaciones laborales alcanzadas por la solidaridad que intenta desentrañar el plenario "Baglieri" porque está claro que dicho fallo no trató una situación análoga a la presente, simplemente se consideró la cuestión atinente a la responsabilidad solidaria del adquirente del establecimiento por obligaciones pendientes de cumplimiento con trabajadores de ese mismo establecimiento cuyos contratos se encontraban extintos.

Y si bien es cierto que en el presente se da esa característica, la de los contratos que se encontraban extintos al momento del arrendamiento las similitudes, dice, se terminan allí, ya que en el fallo plenario se había transferido un establecimiento en marcha, es decir un establecimiento según lo define el art. 6° de la LCT, situación que no se da en autos.

Alude al voto en disidencia del plenario "Baglieri", quedando en claro que la norma se refiere a transferencia de unidades productivas y no a inmuebles desocupados.

En el presente, aduce, no existió cesión, y tuvo por probado la sentencia que P. d. G. S.A. cesó su actividad en forma total en septiembre de 2001 y en su planta de Comodoro Rivadavia, mientras que su mandante, C., la inició recién en octubre de 2002.

Indica que debió determinarse si tuvo lugar o no la transferencia de un establecimiento que invoca la actora, lo que es desmentido por las probanzas. Cita doctrina y jurisprudencia.

Entiende que la sentencia resulta arbitraria porque desnaturaliza los alcances de los arts. 225, 227 y 228 de la LCT, por conferir responsabilidad solidaria ya no a quien adquiere un establecimiento, sino un mero inmueble en donde otrora existió un establecimiento.

Considera que el fallo es arbitrario por contradecir la doctrina que emerge del fallo plenario que invoca, tornándose el fallo incongruente y se refiere a esta con cita doctrinaria.

Por último, considera que la cuestión de si el contrato de trabajo estaba extinto al tiempo del arrendamiento por parte de su mandante no era el desiderátum de la existencia de la responsabilidad, ya que lo verdaderamente determinante radicaba en la inexistencia de un establecimiento transferido.

Por todo lo expuesto pide la revocación del fallo en lo que ha sido materia de agravio y hace reserva del caso federal.

III) Como se desprende de la expresión de agravios, los mismos se circunscriben a la solidaridad

a la que fue condenada la quejosa, adelantando que he de coincidir con lo que ya decidiera en causas que tenían el mismo objeto y los mismos demandados, variando los actores, todos trabajadores de la empresa demandada.

Y a iguales agravios responderé con iguales argumentos a los ya dados en todas aquellas causas en que emití voto.

El apelante no ha dado razones que puedan desvirtuar lo decidido por la a-quo, ya que el argumento principal se basa en la inexistencia de un establecimiento transferido, pues "arrendó un predio cerrado, en donde no funcionaba absolutamente ningún establecimiento desde hacía más de una año, en el que no trabajaba ninguna persona, y que se encontraba prácticamente en ruinas, y al cual debió introducirle mejoras para poder ponerlo en funcionamiento" (fs. 874vta.) y "que recién inició su actividad en el mes de octubre de 2002" (fs. 874), sin tener en cuenta el negocio jurídico, de donde surge la vinculación entre las empresas y se proyecta concretamente en la explotación empresarial.

En la documentación acercada por la Subsecretaría de Trabajo, obran los autos caratulados "E. c/ T. V.", expte 1152/02 y que se encuentra agregada a los autos "E. V., M. c/ V., J. O. y otros s/ demanda Laboral", expte. N° 1944/2002, los que fueron ofrecidos como prueba y que tengo a la vista (fs. 197/276), donde precisamente a fs. 263/264, se hace referencia a una relación contractual que trasciende la mera locación de un inmueble derruido, y otorgan el usufructo de los permisos pesqueros de la sociedad, haciéndose cargo de la cancelación de la deuda que la firma "P. D. G. S.A."

mantiene con el B. C. S.A.

De ello resulta obvio que la locación en los términos que se determinaron, es equiparable a la transferencia del establecimiento a que hace referencia nuestra L.C.T. en los arts. 225 y 228.

Resulta de aplicación la jurisprudencia de la Cámara 1a del Trabajo de Mendoza: “Rosenstein, Roxana c. Paraconcagua S.A. y otros”, 05/09/2007, publicado en LLGran Cuyo 2007 (diciembre), 1126, con nota de Olga Castillejo de Arias, LLonline. “En la ley no se discrimina el título de la transferencia en tanto menciona "transferencia por cualquier título", por lo que abarca todo género de negocios jurídicos (gratuitos u onerosos) que produzcan la transmisión del dominio, o al menos, del uso y goce del establecimiento, sea en forma permanente o transitoria, tal como la sucesión hereditaria, por legado, donación, usufructo o compraventa de la unidad productiva, por fusión, escisión de sociedad, por transferencia de un contrato de locación de obra, de explotación, por arrendamiento o cesión transitoria de establecimiento”... máxime en el presente cuando se realiza la misma actividad, en el mismo predio, con los mismos permisos de pesca y siendo la quejosa la beneficiaria.

Asimismo, el art. 6 de la L.C.T. define al establecimiento como "unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa a través de una o más explotaciones", lo que significa que la transferencia no tiene por qué ser de toda la empresa y que puede ser de parte de ella (secciones, dependencias o sucursales). Lo que sí cabe exigir es que la parte de la empresa transferida constituya por lo menos, una unidad técnica productiva que pueda funcionar como tal

(Lopez-Centeno-Fernández Madrid, "Ley de contrato de trabajo", T. II, pág. 1079).

No cabe duda alguna de que en el caso que nos ocupa, el traspaso es de toda la empresa, como una universalidad económica jurídica, atento a los bienes que abarca, la responsabilidad que asume por las deudas y las facultades de dirección y organización para el logro de fines económicos. La principal consecuencia es que las obligaciones pasan “ope legis” al nuevo adquirente sin que se le puedan oponer al trabajador los pactos en contrario que las partes de la transferencia hubieran celebrado, teniendo, además, en cuenta que la ley protege indistintamente los créditos laborales impagos a la fecha de la transferencia, provengan de contratos vigentes o extinguidos a la fecha de la transferencia (ob.cit., pág. 1084).

Siendo que el art. 225 de la L.C.T. se refiere al caso de transferencia "por cualquier título" del establecimiento y que se demuestra continúa con la explotación del establecimiento, tiene derecho el trabajador al reclamo de los créditos emergentes del vínculo laboral no cancelados, siendo indiferente dilucidar cuál ha sido el título jurídico de la misma..." (CNTr. Sala VII, 23/05/91, "Gramajo Domingo Néstor c. General Paz 10.720 S.R.L.”).

Asimismo, señalan que las normas del Derecho del Trabajo deben ser, o por lo menos en su mayoría, disposiciones de aplicación imperativa, no disponibles para la voluntad de las partes. Por eso es que el Derecho del Trabajo se caracteriza, al revés del Derecho común, por ser un conjunto de normas de aplicación necesaria, normas imperativas.

Si bien el apelante sostiene que la empresa de la

que era titular, dejó de funcionar durante mucho tiempo, tal circunstancia no importa necesariamente el cese de la explotación. "Lo concreto es que, interrumpido o no el desenvolvimiento de la explotación, esta ha continuado luego a través de la demandada... En efecto, la sociedad demandada... para desarrollar idéntica actividad que la que realizaba el demandado,... Como lo expresara, esta concatenación de hechos, analizados bajo el principio de primacía de la realidad, no dejan margen de duda respecto de que existió, una verdadera transferencia del establecimiento, en los términos del art. 225, LCT. Más aún si tenemos en cuenta,... no se ha acreditado el cese del establecimiento y cuanto más, pudo existir una interrupción durante el traspaso, cuyo lapso más o menos prolongado, no afecta a la continuidad de la explotación. De ello la única solución admisible es... una sucesora material del giro anterior. Bajo este análisis y siendo la fórmula utilizada por el art. 225 LCT de gran amplitud, al aludir a la transmisión a "cualquier título", resulta irrelevante considerar la forma de transmisión que... utilizara para transferir su empresa a..., en tanto y en cuanto, de los hechos narrados y analizados en sus reales consecuencias puede arribarse a tal conclusión. Lo que realmente importa son los efectos de esa transmisión en la cuestión que me ocupa. El primer efecto de la transferencia de la unidad productiva es el cambio subjetivo en la titularidad de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con sus dependientes al tiempo de la transferencia, operándose una verdadera subrogación legal. De este modo las deudas del... reconocidas a favor de las actoras

pasan... (y que en los presentes llegó firme la existencia de la deuda que P. D. G., tiene con el actor). Claro que estas deudas que se transfieren al adquirente no dejan de serlo también del transmitente, en virtud de la solidaridad impuesta en el art. 228, LCT". Este ha sido el criterio sustentado por esta sentenciante en numerosos pronunciamientos, al considerar que la norma alude a "todas las obligaciones" que el transmitente "tuviera con el trabajador al momento de la transferencia", y en el caso, aun cuando el contrato de trabajo de las actoras hubiera fenecido antes de la transferencia, trátase de obligaciones devengadas y por ello incluidas en la norma. Concordante con este criterio téngase presente el Plenario 289 de la CNAT, en autos, "Baglieri" (DT, 1997-B-2013) en el que se concluyera que "El adquirente de un establecimiento en las condiciones previstas en el art. 228 de la LCT es responsable por las obligaciones del transmitente derivadas de relaciones laborales extinguidas con anterioridad a la transmisión" ("Basualdo, Raquel E y otra c/ Iglesias, Enrique y /u otros. C.T. y M.", Santiago del Estero, 16-12-2005. Trib. Superior de la Provincia de Córdoba, Sala Laboral, "Córdoba, Claudio A. C Cerro largo S.A. y otros", 27-04-1994, LLOnline.

Atento a cómo se resuelve, las costas las impongo al apelante vencido.

Tendré presente a fin de regular los honorarios de los profesionales que intervinieron la labor profesional, el resultado obtenido, la posibilidad de que las pretensiones prosperen y demás pautas de los arts. 5 y 13 de la ley de aranceles. V

A la segunda cuestión la Sra. Juez de Cámara

Reynoso de Roberts dijo:

1) Rechaza los agravios y confirma la sentencia de fs. 842/864.

2) Impone las costas al apelante vencido y difiere la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

3) Tiene presente la reserva del caso federal.

A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Considerando que a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de esta Alzada, por lo cual, a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quien abre el recurso la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a ella me remito.

I.A) A fs. 868/878 la parte codemandada C. expresa agravios, a fs. 879 se corre traslado de los mismos, los que no fueran contestados por la parte actora

I.B) Advirtiendo que el presente caso es en cuanto a la temática planteada por la apelante codemandada idéntica –salvo la persona accionante- a la tratada y decidida por la suscripta en autos caratulados: "F., H. A. c/ T., B. A. y otros s/ Demanda Laboral (haberes e indemniz. de ley)", expte. N° 21/09 del 26/03/09, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (expte. N° 1930/02) la cual es citada expresamente por la a-quo en su considerando III (fs. 859vta./860) he de transcribir, adecuando en lo que sea necesario, lo que en dicho juicio entendí.

En dicha oportunidad dije que la cuestión planteada por la codemandada apelante presenta aristas

muy interesantes, en primer lugar tengo en cuenta que ha llegado firme a esta instancia la decisión de la a-quo de la determinación de existencia de solidaridad entre el codemandado Sr. J. O. V. y la codemandada P. d G. S.A. (considerandos III – fs. 856vta.), fundada en lo prescripto por el art. 30 de la LCT.

Observo que no ha sido negado en autos que la codemandada P. d. G. S.A. suscribiera con la codemandada apelante C. –C. A. d P. S.A.-, luego que cerrara sus instalaciones en el mes de julio del 2001, un contrato de locación de Planta de Procesamiento el día 09/05/02 (fs. 170), así como un "Acta de Intención - Locación de Planta Pesquera", el día 02 de abril del 2002 (fs. ref. 270 vta./271).

Parece claro que aún cuando con posterioridad, entre 2001 y 2002, se haya transferido o transmitido de algún modo -en este caso bajo las formas instrumentales- la explotación del establecimiento, dicho acto jurídico implicó la cesión de un contrato que mantuvo la posibilidad que se consideren subsistentes las obligaciones dinerarias emergentes del despido incausado y de la liquidación final de haberes.

Es evidente que al momento de la presunta cesión o transmisión del establecimiento, que existían obligaciones pendientes de cumplimiento, con lo cual las mismas han de entenderse traspasadas al cesionario o adquirente de las que resultaron, por decisión judicial, codeudores solidarios en los términos de los arts. 225 y 228 de la LCT. Con lo cual le cabe la responsabilidad a la apelante codemandada.

En este sentido ha determinado la doctrina especializada en el tema (Dr. Julio Armando Grisolía, "Manual de Derecho Laboral", 4ta. Edición actualizada

año 2008, Editorial "LexisNexis", págs. 176), que: "Por lo tanto, el nuevo empleador (adquirente) asume en forma solidaria las deudas anteriores… (art. 228). El fundamento radica en proteger al trabajador contra posibles maniobras fraudulentas… Es importante destacar que la solidaridad no solo abarca las deudas con los trabajadores que siguieron trabajando con el adquirente, sino también las deudas de los dependientes cuyos contratos de trabajo se extinguieron con anterioridad a la transferencia".

En cuanto a la jurisprudencia mencionada por la codemandada apelante a fs. 873 y que sirviera de fundamento para arribar a una decisión por la a-quo (fs.858vta./859vta.- "Baglieri, Osvaldo D. v. Francisco Nemec y Cía. SRL" (Cám. Apel.Trab, Fallo Plenario 289 del 08/08/97), hace a mi entender que lo analizado por la mayoría es de aplicación en los presente autos.

Ello es así porque la postura de la mayoría en dicho plenario –avalada por la opinión del Fiscal General del Trabajo Dr. Eduardo Álvarez y los votos de los Dres. Guibourg y Fernández Madrid– sostiene que existe una necesidad imperante de proteger al acreedor laboral y afirma que la intención del legislador fue otorgar la tutela de sus derechos sin formalismos de difícil cumplimiento. Entiende que resulta conveniente priorizar el principio de unidad de empresa y garantizar los créditos laborales anteriores o posteriores a la transferencia del establecimiento y la reivindicación de la interpretación normativa más favorable al trabajador mediante la aplicación del principio in dubio pro operario (art. 9 LCT).

El Dr. Guibourg expresó que existe una justificación para imponer al cesionario el pago de

deudas que no contrajo y cuya existencia tal vez no conozca: en el acto de adquirir el establecimiento está en condiciones de averiguar el pasivo que pesa sobre el transmitente y, en todo caso, puede exigir de este las garantías adecuadas para no verse perjudicado más allá de lo previsto. El trabajador, en cambio, carece de estas facilidades y, desaparecido el empleador originario, no tiene punto de referencia del lugar de trabajo y de la persona de su nuevo titular.

El Dr. Fernández Madrid manifestó que el art. 225 de la LCT menciona: "todas las obligaciones que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia"; por lo tanto, si la ley no distingue entre los trabajadores en actividad y los trabajadores cuyos contratos concluyeron con anterioridad a la transferencia, no corresponde formular distinción alguna.

Asimismo, se acota en dicho plenario por parte de la mayoría, que la norma busca asegurarle al trabajador la garantía que da la titularidad –o en este caso la calidad de locatario- del establecimiento en orden al cobro de su crédito, puesto que el transmitente no deja de ser también deudor en virtud de la solidaridad que establece el art. 228 de la LCT. Por ello, no resulta viable considerar incluidos en la norma solo a los créditos derivados de los contratos de trabajo, todavía vigentes al momento de efectuarse la transferencia.

Por las consideraciones de hecho y de derecho expuestas arribo a la convicción de que no se haga lugar a los agravios planteados por la codemandada apelante C. d. A. d. P. S.A. (C) a fs. 868/878 y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 842/864 en cuanto fuera materia de agravios.

I.C) En atención a cómo fueron resueltos los agravios expuestos por la codemandada apelante corresponde se impongan las costas a su cargo, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 69, Ley XIII, nro. 5, Anexo "A", Digesto Jurídico. Difiérese la regulación del profesional interviniente para el momento del acuerdo, donde se tendrá en cuenta para su regulación la importancia del tema traído a decisión, la labor profesional desarrollada y el éxito obtenido, en un todo de acuerdo a lo establecido por los arts. 5, 6, 13 y ccdtes. Ley XIII, nro. 4, Digesto Jurídico).

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Por coincidir con la fórmula postulatoria de la vocal preopinante Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y considerar que esta parte del voto no está comprendida en la manda constitucional del art. 169, a la misma me adhiero.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 274 y 275 del CPCCCh (Ley XIII-5-DJ, Anexo A), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. García Blanco no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente

SENTENCIA:

1) Rechazar los agravios y confirmar la sentencia de fs. 842/864.

2) Imponer las costas al apelante vencido, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales del Dr. H. E. C. G. en el veinticinco por ciento (25%) de lo regulado a su parte por la labor en la instancia de grado.

3) Tener presente la reserva del caso federal.

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

REGISTRADA BAJO EL nro. DEL AÑO 2013
DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "L"